

La extensión agraria

LA 'extensión agraria' surgió en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX, como iniciativa de las universidades para mejorar la educación en sus comunidades vecinas. Las universidades de Estados Unidos adoptaron la idea a principios del siglo XX para aplicar y difundir entre los agricultores los resultados de sus investigaciones. España adoptó el modelo público norteamericano de extensión agraria en 1955, pero sucumbió a finales del siglo XX como consecuencia de la política agraria común europea (PAC).

La extensión agraria no es una herramienta obsoleta ni desfasada, sino un importante desafío mundial, imprescindible para alcanzar la seguridad alimentaria, facilitar el acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías y a la evolución de los mercados, facilitar la comprensión de los retos que plantea el cambio climático y mejorar la gestión de los recursos (FAO, 2010).

Según la FAO, por extensión agraria cabe entender el sistema que facilita el acceso de los agricultores, sus organizaciones y otros agentes del mercado a los conocimientos, las tecnologías y la información, fomentando su interacción con la investigación, la enseñanza, la agroindustria y otras instituciones pertinentes y coadyuvando en el diseño de prácticas y habilidades técnicas, de gestión y organización.

En Estados Unidos y Canadá, los sistemas de extensión públicos continúan desempeñando un importante papel. Centrados en el medio y largo plazo, atienden la transferencia de conocimientos y de capacidades técnicas y de gestión, así como el desarrollo del capital social, siendo las empresas proveedoras de insumos, incluidas las cooperativas de agricultores, las que transfieren las tecnologías. Sin embargo, en mu-

EL REFLEJO

Es necesario reactivar el sistema público de extensión agraria.

Por Joaquín Olona Blasco, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco



chos países europeos, así como en Australia, Nueva Zelanda y otros países desarrollados, los sistemas públicos de extensión han desaparecido, como es el caso de España, o se han privatizado.

A medida que las tecnologías agrarias se convierten en bienes privados o patentados, aumenta la privatización de la transferencia de tecnología, cuyo coste es sufragado, directa o indirectamente, por los agricultores. En este marco, el asesoramiento técnico está impulsado por el interés del proveedor en ganar dinero con sus productos y servicios, que no siempre es compatible con los intereses de los agricultores.

Hay una tendencia generalizada a exigir que los agricultores paguen directamente los servicios de exten-

sión, al tiempo que se aplican complicados sistemas para darles dinero en compensación por lo mal que les remunera su trabajo el mercado. Independientemente de cómo se organicen, es necesario reconocer que gran parte del coste de estos servicios debe financiarse con fondos públicos, porque es muy difícil que las empresas privadas puedan cobrarlos directamente a los agricultores, especialmente cuando asesoran sobre bienes públicos o comunes, como el agua, el clima, el genoma, el nitrógeno u otros ciclos naturales (FAO, 2010). Poner estos servicios en manos de las empresas privadas no es recomendable, salvo que la financiación gubernamental esté garantizada a largo plazo, que ni siquiera es deseable que suceda. Así, la privatización llevada a cabo en Reino Unido y otros países no se demuestra eficaz, observándose que las empresas desatienden a los agricultores a medida que ven reducida su financiación pública.

El modelo público centralizado de extensión tampoco responde a las necesidades y retos actuales. Se necesitan nuevos modelos descentralizados organizados por y para los agricultores, pero con apoyo público suficiente. Porque es una quimera pensar que el sector pueda dotarse por sí mismo de los servicios de extensión con la fiabilidad y estabilidad necesarias.

Los fondos europeos ofrecen recursos, pero su aplicación no ha desarrollado ninguna alternativa eficaz al desaparecido sistema público de extensión. Difícilmente lo harán si la Administración, las organizaciones agrarias, los técnicos y los propios agricultores no formulan la extensión como un objetivo prioritario ni cooperan activamente para lograrlo. No es un problema de dinero sino de falta de ideas y de ambición.